

# LA AGONIA DEL PUEBLO GUATEMALTECO

Catholic Institute for International Relations, Londres.

## RESUMEN

*El tratamiento dado a los pueblos indígenas de Guatemala es la clave para entender la historia reciente de este país centroamericano. La tierra, por lo tanto, el poder y la riqueza, han caído en manos de la minoría ladina cuyo origen proviene de la mezcla de sangre nativa y europea. Quizás esta sea la razón de su menosprecio por la población indígena pura, la cual representa actualmente el 60 por ciento de los ciudadanos guatemaltecos.*

*Los ladinos a través de los militares han traído la pobreza, el hambre y la escasez de viviendas. Esta ha sido la base de la agitación en las zonas rurales y que los sucesivos gobiernos militares han calificado como "subversión".*

## Introducción

Guatemala, conocida por su belleza como "la tierra de la eterna primavera," ha sido desfigurada, durante gran parte de los últimos 30 años, por una campaña de exterminio dirigida por el gobierno en contra de su propio pueblo. Se estima que el número de muertos, desde 1954, bordea los 100.000.

Las operaciones militares dirigidas contra la población indígena, en los últimos años, se han caracterizado por una brutalidad deliberada, ha habido casos en que se ha reunido a los hombres

de la aldea en la plaza y los han quemado vivos, ante la mirada impotente de sus mujeres e hijos; en otras oportunidades, mujeres y niñas han sido violadas delante de sus familias, y a las mujeres embarazadas se les ha abierto el vientre. En los últimos atropellos perpetrados contra las comunidades indígenas, estas acciones han sido llevadas a cabo por miembros de las propias comunidades, reclutados para el ejército o para las patrullas de "defensa civil" y que son entrenados con brutalidad en forma sistemática.

Guatemala está situada en el istmo centroamericano, y abarca un área de 42.000 millas

cuadradas. Limita al norte con México y al noroeste con Belice. Al sur y al sureste limita con El Salvador y Honduras. Su población es de 7.300.000 habitantes, 65 por ciento de los cuales vive en áreas rurales. El 60 por ciento de la población guatemalteca es indígena.

El tratamiento dado a los pueblos indígenas de Guatemala, descendientes de los mayas, antiguos gobernantes de Centroamérica, es la clave para entender la historia reciente de Guatemala. La tierra —por lo tanto, la riqueza y el poder— han caído principalmente en manos de la minoría ladina cuyo origen proviene de la mezcla de sangre nativa y europea, y ésta sea, quizás, la razón de su menosprecio por la población indígena pura. El 65 por ciento de la tierra en Guatemala pertenece a inmensos latifundios que enriquecen a una minoría de terratenientes. Los indígenas han sido forzados a ocupar un tercio de la tierra, principalmente las escarpadas sierras del occidente, donde apenas subsisten con magros cultivos.

### Tierra y trabajo

La población indígena comenzó a ser despojada de su tierra en el siglo XVI, bajo dominio español, pero este proceso se intensificó en el siglo XIX, cuando el café pasó a ser la base de la economía guatemalteca. Los antiguos propietarios de la tierra eran retenidos, para hacer funcionar esta nueva economía, en un sistema de trabajo forzado. Incluso, en 1934, una ley contra la vagancia obligaba a los campesinos a trabajar en las haciendas por 150 días al año, so pena de encarcelamiento o trabajo forzado en construcción de caminos.

La compulsión legal fue luego reemplazada por las necesidades económicas que forzaron a los campesinos —incluyendo, a menudo, las familias enteras— a recorrer las plantaciones de café, azúcar o algodón de la costa sur en busca de trabajo temporal. Una alternativa usada por los contratantes era visitar las aldeas serranas adelantando dinero a los campesinos, para la compra de alimentos o semillas y —especialmente para las fiestas nacionales— alcohol; la única manera de cancelar estas deudas era enrolándose para trabajar en las plantaciones.

### Condiciones económicas y sociales

La economía guatemalteca depende aún, en gran medida, de la agricultura la cual representa

27 por ciento de la producción (P.N.B.) y emplea el grueso de la fuerza de trabajo.

Productos agrícolas tradicionales como café, algodón, banano, azúcar, y carne, representan más de la mitad de las exportaciones del país. Durante la década del 70 se introdujo el cultivo de nuevos productos agrícolas y se fomentó la industria con la creación del mercado común centroamericano. El descubrimiento reciente de grandes yacimientos minerales y de petróleo en la faja transversal del norte y en El Petén del norte ha causado el desalojo brutal de las comunidades indígenas de la zona para que esta vasta área sea explotada por la élite terrateniente, la cual ahora incluye a los militares y a las corporaciones transnacionales.

Entre los años 1960 y 1980 el P.N.B. del país creció a un ritmo de entre 5.7 y 8.0 por ciento anual, en términos reales (el más rápido de la región) y hubo un enorme aumento de la inversión extranjera, la cual ganaba entre el 30 y 35 por ciento sobre los capitales invertidos. Este impresionante aumento de la riqueza, sin embargo, sólo benefició a una pequeñísima parte de la población: según un estudio de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) de Estados Unidos, el nivel de vida de la mayoría de la población bajó. Entre 1959 y 1978, la parte del ingreso nacional que beneficia al 5 por ciento más rico de la población aumentó del 48 al 59 por ciento, mientras que lo percibido por el 50 por ciento de la gente más pobre disminuyó del 9 al 7 por ciento. En otras palabras, durante los años de expansión económica la mayoría de los guatemaltecos se empobreció. La AID afirmaba en 1980: "tres de cada cuatro guatemaltecos son pobres de acuerdo con las definiciones de pobreza internacionalmente reconocidas."

La pobreza es el resultado directo de la concentración de la tierra en pocas manos: el 80 por ciento de la población se mantiene gracias a una agricultura de subsistencia, un 2 por ciento de las haciendas ocupan el 65 por ciento de la tierra cultivable, mientras que la inmensa mayoría de los pequeños propietarios agrícolas (81 por ciento de los predios) han sido constreñidos al 10 por ciento. El proceso de concentración de la tierra continúa dejando al campesino con predios que no sólo son muy pequeños para mantener a su familia, sino que, además, el terreno que ocupan ha sido descrito por la AID como inadecuado para la agricultura.

Entre 1964 y 1979 la superficie de tierras en manos de los latifundistas aumentó aún más. El crecimiento del sector agro-exportador liquidó el autoabastecimiento de alimentos en Guatemala; en 1981 el precio de los frijoles, del aceite comestible y de otros alimentos básicos había subido a niveles comparables a los de zonas urbanas de los Estados Unidos. Según el Instituto para la Nutrición en Centroamérica y Panamá, la mitad del sector más pobre de la población guatemalteca consume sólo 60 por ciento del mínimo de calorías necesarias, por lo que tiene un déficit proteico de casi 50 por ciento. El 62 por ciento de los niños menores de 5 años presenta problemas de desnutrición y un 30 por ciento de este grupo padece de desnutrición avanzada. La tasa oficial de mortalidad infantil alcanza el 170 por mil, aunque algunos expertos estiman que es más alta. Este mismo rubro entre niños indígenas sube a casi el doble. El estudio de la AID de 1980, ya mencionado, concluye que la mitad de las muertes debidas a causas naturales se evitarían si se contara con condiciones sanitarias, agua potable y vivienda adecuada.

La pobreza de la mayoría de los guatemaltecos ha sido considerada frecuentemente, por las instituciones financieras internacionales, como un freno al desarrollo del país; los ingresos de la mayoría de la población son demasiado bajos para proveer un mercado interno para la producción industrial y el comercio. Sin embargo, como las soluciones recomendadas (redistribución de la tierra, aumento de los impuestos, inversiones en salud y otros servicios) afectarían el modo de vida de la élite guatemalteca, han sido siempre rechazadas, y los gobernantes del país han ignorado las demandas de los pobres sin reparar en el costo social.

### La revolución pacífica

El único quiebre del estado de sometimiento y servidumbre de la población rural de Guatemala en este siglo ocurrió durante las presidencias de Juan José Arévalo (1945-1950) y Jacobo Arbenz (1951-1954), los únicos líderes genuinamente democráticos que ha tenido el país. La nueva constitución del presidente Arévalo incluía la me-

didada de que "la propiedad privada podía expropiarse previa compensación al propietario, para satisfacer una necesidad pública que hubiera sido legalmente probada." Arévalo abolió la ley sobre la vagancia que obligaba a los campesinos a trabajar en las haciendas, ordenó el registro de la tierra para reconocer la propiedad de aquellos que la trabajaban en ausencia de sus propietarios e introdujo una ley que daba a los campesinos sin tierra el derecho a alquilar terrenos a los latifundistas. La reforma agraria de Arbenz proponía la expropiación de predios no cultivados que tuvieran más allá de determinadas dimensiones y, también, de grandes latifundios de tierra cultivada. La tierra expropiada sería nacionalizada y entregada a campesinos sin tierra. El proceso de reforma agraria exigía la participación de organizaciones campesinas y sindicatos a nivel local y regional, incentivando de esta forma un movimiento sin precedentes en el país, hacia la organización de campesinos y trabajadores rurales que culminó con la formación de la Confederación Nacional de Campesinos de Guatemala (CNCG). Un 40 por ciento de toda la tierra redistribuida provenía de las haciendas de sólo 23 propietarios; este dato sólo nos da una visión de la enorme extensión de tierras en manos de una minoría.

### Contrarrevolución

Las reformas de los gobiernos de Arévalo y Arbenz fueron consideradas por Estados Unidos como la evidencia de una penetración comunista. Es cierto que había algunos comunistas en el gobierno del presidente Arbenz, pero nunca se llegó a demostrar que hubieran tenido algún papel preponderante o que estos gobiernos reformistas hubieran recibido apoyo comunista desde el exterior. Sin embargo, la administración norteamericana montó una campaña de propaganda contra el gobierno guatemalteco, impidiendo préstamos y cerrando el mercado de Estados Unidos a los productos de Guatemala. La crisis sobrevino cuando el gobierno de Arbenz se lanzó en contra de la muy influyente United Fruit Company, de propiedad norteamericana. El gobierno expropió la mayor parte de la tierra de la United Fruit que permanecía ociosa, 85 por ciento. A pesar de que

**Las masacres no sólo han alcanzado niveles insospechados, sino que, además, el terror se transformó en un instrumento refinado para destruir la moral y la cohesión social de las comunidades indígenas.**

el gobierno ofreció compensar a la compañía —sobre la base del avalúo que la propia United Fruit había hecho de sus posesiones con miras a la evasión de impuestos— ésta protestó e invocó la ayuda de sus amigos en altos puestos de la administración norteamericana.

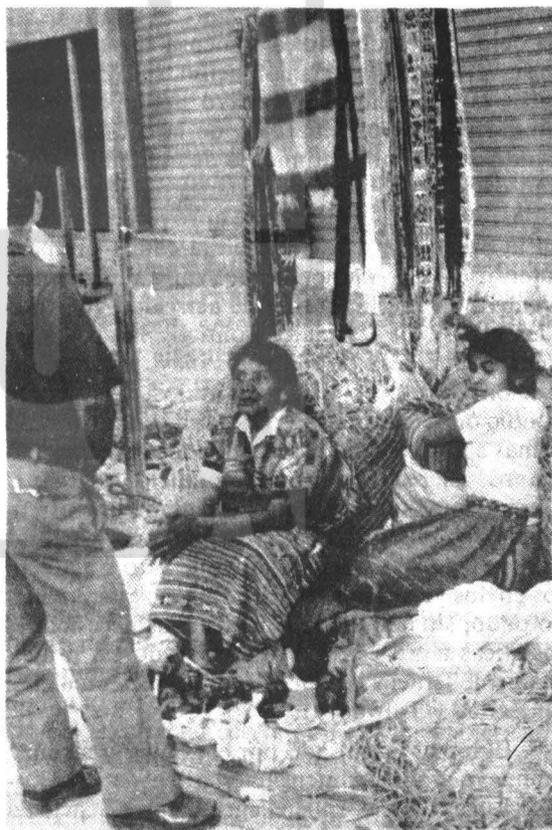
La elaborada estrategia desplegada por la CIA para derrocar al gobierno electo de Arbenz ha sido documentada en detalle recientemente. Aparte de las sanciones económicas y la propaganda hostil que incluía una campaña de desestabilización del tipo que se usaría más adelante en contra del régimen de Allende en Chile, la CIA reclutó exiliados y militares descontentos con el gobierno. Pilotos de la CIA bombardearon algunos puntos en Guatemala y el ejército rehusó prestar su apoyo al gobierno. Las fuerzas invasoras entraron al país desde Honduras y Guatemala fue “liberada.” El coronel Castillo Armas se instaló en la presidencia en 1954 luego de que Arbenz fuera obligado a renunciar.

El nuevo gobierno abolió inmediatamente la reforma agraria. La tierra expropiada fue devuelta a sus antiguos dueños, incluyendo la de la United Fruit —en 1956 sólo un 0.04 por ciento de los beneficiados por la reforma agraria quedaba aún en posesión de sus tierras. En el período siguiente, los campesinos continuaron siendo despojados, a menudo con violencia, de los pequeños predios que labraban para procurarse su subsistencia. La superficie de tierras arrebatada a la producción de alimentos creció en un 40-50 por ciento en la década del 70. Esta política ha traído como consecuencia pobreza, hambre y escasez de viviendas; situación que continuó siendo dominante en el período de expansión de la producción industrial y de las exportaciones y que ha sido la base de la agitación en las zonas rurales y que los sucesivos gobiernos han calificado como “subversión.”

El nuevo régimen pronto comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Castillo Armas fue asesinado por uno de sus ayudantes en 1957; una revuelta militar en contra de su sucesor llevó a la formación de los primeros movimientos guerrilleros; en 1963 hubo un golpe militar, en parte, para impedir la vuelta al poder de Arévalo en las elecciones fijadas para 1964. A esto siguió el comienzo de operaciones en gran escala de contrainsurgencia apoyadas por Estados Unidos, a pesar de que aún la amenaza guerrillera carecía de importancia. Se dotó a la policía de equipos

de comunicaciones sofisticados y de otros aparatos de tecnología avanzada mientras se entrenaba a los militares en las últimas técnicas norteamericanas de respuesta rápida y control de población.

El nuevo adiestramiento fue puesto a prueba, por primera vez, por el coronel Arana Osorio en una campaña en las sierras del este, contra una fuerza guerrillera que no contaba con más que unos pocos cientos de combatientes. Se estima que las tropas de Arana asesinaron a 8.000 personas, en su gran mayoría campesinos indefensos. Al mismo tiempo en las ciudades creció la oposición al régimen. Se empleó gran violencia para hacer frente a esta oposición, destacándose los escuadrones de la muerte cuyos fuertes lazos con la policía y el ejército se comprobaron más tarde. El terror se implantó como la línea central de la política del gobierno de Arana, quien fue investido presidente en 1970. Arana decretó al país en estado de sitio. Se estima que 15.000 personas desaparecieron entre 1970 y 1975 con comprobada complicidad del gobierno en por lo menos 75 por ciento de los casos.



Las políticas de Arana en la segunda mitad de su periodo fueron de mayor significación a largo plazo. Arana se lanzó a un programa de reactivación económica teniendo gran cuidado de que el ejército se beneficiara con él. El desmedido aumento de los fondos de la seguridad social del ejército, como resultado de la especulación, hizo necesaria la creación de un banco: el Banco del Ejército, con el objeto de canalizar los fondos hacia inversiones que fueran de provecho para la oficialidad. Este poder económico ha dado base al ejército para jugar un papel independiente en el gobierno. A partir de este momento los civiles empezaron a ser excluidos en forma creciente del poder real, confinándoseles a funciones de asesoría y a puestos meramente decorativos tales como la vicepresidencia de la república.

### El terremoto de 1976

En febrero de 1976 Guatemala sufrió el peor desastre natural de su historia, cuando un terremoto azotó 16 de las 22 provincias del país dejando un saldo de 22.000 muertos, 77.000 heridos y un millón de personas sin hogar. El sismo no sólo dejó al descubierto la inmensa diferencia en los niveles de vida de la población, sino que, también, la operación de socorro actuó como estímulo para la organización de la comunidad y ayudó a crear un sentimiento de unidad e identidad nacional en las comunidades pobres y apartadas. A su vez, el ejército se aprovechó de su rol en la operación de auxilio en la catástrofe para intensificar su campaña de contrainsurgencia frente a un fuerte rebrote de actividad guerrillera. En 1977 los asesinatos políticos pasaron a ser nuevamente cosa de todos los días. La administración Carter, en Estados Unidos, puso como condición previa para continuar suministrando armas a Guatemala, el respeto a los derechos humanos. El rechazo a estas condiciones, que el ejército guatemalteco consideró como una afrenta a la dignidad nacional, provocó el corte del suministro de armamentos, aunque esto no afectó los envíos ya acordados. El gobierno guatemalteco pudo, sin embargo, satisfacer sus necesidades logísticas a través de otros proveedores, principalmente Israel y Argentina y, más recientemente Sudáfrica y Taiwan.

El terror impulsado por el gobierno alcanzó un nuevo grado de intensidad bajo el general Romeo Lucas García quien llegó a la presidencia en

1978 mediante una elección espectacularmente fraudulenta. Sin embargo, su gobierno fue incapaz de aplastar el creciente movimiento guerrillero que operaba en la mayor parte del país y que contaba con inmenso apoyo popular. Los militares jóvenes culparon del fracaso a la ineficiencia del alto mando y a la corrupción de los oficiales más antiguos. Estados Unidos, mientras tanto, presionaba para que se eligiera un presidente civil en 1982 para, de este modo, poder mejorar la imagen de Guatemala en el extranjero. Sin embargo, cuando Lucas aseguró la sucesión de su ministro de defensa, Aníbal Guevara, quien simbolizaba todos los defectos y fracasos, los oficiales descontentos dieron un golpe e invitaron al general Efraín Ríos Montt a escabezar una junta de tres miembros.

### El sistema en crisis: Ríos Montt

A pesar de las promesas de respetar a los derechos humanos y de reducir la violencia urbana, pronto quedó en claro que el nuevo régimen había intensificado la campaña de contrainsurgencia en las áreas rurales. En julio de 1982, Amnistía Internacional publicó un informe titulado "Ejecuciones masivas y sin proceso en las zonas rurales bajo el gobierno del general Ríos Montt." Para finales de año, algunos cálculos hablaban de 8.000 muertos. El régimen de Ríos Montt ha sido también severamente criticado por su manejo de tribunales secretos especiales los cuales podían sentenciar a muerte sin ninguna salvaguarda legal para los detenidos; con este procedimiento se ejecutó a 15 personas.

A medida que aumentaban las evidencias fue quedando en claro que la política de Ríos Montt era simplemente una concepción más extremada de la contrainsurgencia destinada a destruir la base de apoyo social de la guerrilla y a establecer el control militar a través de todo el país. Esta política que ha continuado desarrollándose bajo el actual gobierno, se caracteriza, según los militares, por tener tres etapas simultáneas: "pacificación," "reconstrucción" y el establecimiento de "polos de desarrollo." En el hecho, la "pacificación" no es más que el uso del terror y la creación de una enorme población de desplazados; por "reconstrucción" se entiende la reubicación forzada de la gente, lo cual permite al ejército dividir y controlar las comunidades y "polos de desarrollo" no sólo significa instalar a

## **Durante los años de expansión económica la mayoría de los guatemaltecos empobreció. La pobreza es un resultado directo de la concentración de las tierras en pocas manos.**

la gente por la fuerza en "aldeas modelo" bajo control militar permanente, sino también el control militar de toda la ayuda oficial y programas de auxilio. En las zonas rurales se obliga a la gente a prestar la cédula de identidad para desplazarse, incluso a cortísima distancia y es frecuente el allanamiento de personas y automóviles.

Bajo Ríos Montt las masacres no sólo alcanzaron niveles insospechados, sino que, además, el terror se transformó en un instrumento refinado para destruir la moral y la cohesión social de las comunidades indígenas. Los refugiados han informado respecto a lo que parecía ser una política deliberada: los viejos y los niños de la comunidad eran asesinados primero, como para dar a entender que lo que se estaba destruyendo era el pasado y el futuro de esa comunidad. La tortura, las violaciones y las mutilaciones eran cosa cotidiana. Otro elemento importante han sido las patrullas de "defensa civil," constituidas por campesinos llevados a la fuerza a unidades militares auxiliares y cuyo número se estima actualmente, en 800.000 hombres. Estas unidades no sólo son obligadas a servir de "carne de cañón" al ejército regular cuando se trata de hacer entrar en acción a la guerrilla, sino que también se las hace cometer todo tipo de atrocidades en contra de la población civil. Las actividades de estas patrullas se han extendido, últimamente, a labores de inteligencia y a mantener a escala nacional una presencia militar permanente en las zonas rurales aisladas. Cuando los obispos de la Iglesia católica hicieron un llamado a las autoridades para que disolvieran las patrullas de defensa civil, el gobierno se negó a hacerlo aduciendo que ellas constituían la técnica más efectiva conocida hasta el momento para proteger y controlar a la población rural.

El programa de "ayuda" de Ríos Montt llamado "fusil y frijoles" empleó a campesinos en la construcción de caminos y sistemas de riego. En estos trabajos los campesinos recibían alimentos como pago; también se otorgó ayuda a los pequeños propietarios para proyectos agrícolas. Aún cuando estaba claro que este programa no constituía una reforma agraria, sin embar-

go, muy pronto, los sectores terratenientes manifestaron su oposición.

Ríos Montt adoptó también medidas para remediar los problemas cada vez más serios de la economía guatemalteca: para contener la salida de capitales, el gobierno impuso controles cambiarios y anunció planes para introducir un impuesto al valor agregado del 10 por ciento sobre todas las mercancías, exceptuando los artículos de primera necesidad. La reacción adversa del sector empresarial hizo que se produjeran cambios de opinión bastante ácidos entre éstos y el gobierno y las relaciones de Ríos Montt con los partidos políticos se enfriaron rápidamente. Algunos militares simpatizantes con los partidos políticos intentaron varios golpes de Estado a mediados de 1982 hasta que el 1 de julio, Ríos Montt declaró el estado de sitio y algunos de sus colaboradores empezaron a hablar de una suspensión indefinida del sistema de partidos.

Ríos Montt pertenecía a una secta evangélica fundamentalista con base en California, conocida como la Iglesia del Verbo y su religión se fue convirtiendo paulatinamente en blanco para la oposición a medida que el régimen adquiría una publicidad hostil en el extranjero. Bajo Ríos Montt el número de feligreses de las sectas evangélicas fundamentalistas alcanzó cifras sin precedentes. La ejecución de 6 prisioneros ordenada por Ríos Montt antes de la visita de Juan Pablo II a Guatemala en 1983 —a pesar de la petición de clemencia que hiciera el propio Papa— fue una afrenta al sentir de los católicos y una torpeza en cuanto a relaciones públicas.

### **La crisis continúa: Mejía Vítores**

En general Ríos Montt fue depuesto el 8 de agosto de 1983 en un golpe perpetrado por su ministro de defensa, general Oscar Mejía Vítores. El cambio de jefatura fue ampliamente interpretado como un desplazamiento hacia una coordinación más estrecha con la política norteamericana en Centroamérica, algo que Ríos Montt había rechazado. El fin de semana previo al golpe, el general Mejía había asistido a una reunión en

Honduras con los ministros de defensa de Honduras y El Salvador, y el general Paul Gorman, jefe del comando sur norteamericano. La reunión se celebró cuando regresaba de una visita al portavoz norteamericano *Ranger*, surto frente a la costa nicaragüense. Mejía Víctores hizo público su apoyo a la política norteamericana hacia Nicaragua el 9 de agosto.

Otras afirmaciones anteriores del nuevo régimen buscaban la conciliación con los sectores que Ríos Montt había alejado. El general Mejía anunció que habría elecciones para una asamblea constituyente en 1984. Se levantó el estado de sitio y se abolieron los tribunales especiales. Mejía prometió también revisar el impuesto al valor agregado propuesto por Ríos Montt. Un comunicado emitido por el alto mando del ejército enfatizó el deseo del régimen de prevenir divisiones en la institución manteniendo el sistema tradicional de ascensos, que Ríos Montt había abandonado.

A pesar de haberse levantado el estado de sitio y abolido los tribunales especiales, la horrible situación de los derechos humanos continuó bajo el nuevo régimen. Inmediatamente después del golpe volvieron a aparecer los escuadrones de la muerte en las ciudades y a fines de 1982 comenzaron nuevamente las desapariciones de personas, que habían disminuido en número, al comienzo del régimen de Ríos Montt.

Ha habido cientos de víctimas desde comienzos de 1983 y hay evidencias de que muchas de las víctimas estarían detenidas en centros secretos.

### **El ocaso de la política civil**

La política constitucional de Guatemala ha sufrido un descrédito permanente debido al predominio cada vez mayor de los militares y a la manipulación sucesiva de las elecciones a partir de 1954. Los partidos políticos deben inscribirse en el ministerio de defensa y deben entregar previamente una lista de sus miembros. Esto ha constituido el origen de asesinatos políticos en los partidos de oposición. De los partidos que participan en elecciones, sólo el Movimiento de Liberación Nacional (MLN) y la Democracia Cristiana tienen una base real; el MLN manifiesta provenir del golpe de 1954 y hace alarde de ser el partido de la violencia organizada; está dominado por el sector más reaccionario de los terratenientes. Otros partidos que han estado asociados

con el gobierno en los últimos años, no son más que meras etiquetas para legitimar facciones dentro de la oligarquía y para favorecer intereses personales de algunos políticos. La Democracia Cristiana ha tenido un marcado viraje hacia la derecha y los social demócratas, quienes han gozado del apoyo popular en el pasado, se han visto debilitados por el asesinato de sus líderes y activistas, siendo forzados a elegir entre la participación en un remedo de sistema electoral o entrar a una oposición clandestina. Incluso los partidos de derecha han tenido que contentarse con una apariencia de poder, dado que los militares han copado todas las instituciones del Estado. Desde 1966 todos los presidentes de la república han sido generales.

### **La oposición**

El golpe de 1954 no sólo puso fin de manera violenta al proceso de renovación económica y liberación social iniciado en los gobiernos de Arévalo y Arbanz, sino que también delimitó los márgenes de la actividad política en términos muy estrechos, para excluir cualquier actividad que pudiera presentar un desafío al régimen contrarrevolucionario.

Sin embargo, la oposición a la oligarquía siempre ha existido y, en los últimos años, ha aumentado debido a la participación indígena.

Las restricciones de las actividades políticas y sindicales dejaron al ejército como la única fuente de oposición. Al comienzo de la década del 60, luego de una revuelta frustrada, algunos oficiales disidentes se unieron con miembros del PGT (partido de tendencia comunista), con grupos de campesinos y estudiantes para formar el primer movimiento de oposición armada, que se llamó: Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR). A pesar de algunos éxitos iniciales, el movimiento fue derrotado por la campaña masiva de contrainsurgencia llevada adelante por el coronel Arana entre 1966 y 1968. Los escuadrones de la muerte hicieron entonces su primera aparición, secuestrando y asesinando a miembros de organizaciones comunitarias y sindicales. El hecho de que esta brutal respuesta a la oposición hubiera ocurrido bajo la presidencia de un civil —Julio Méndez Montenegro— puso dolorosamente de manifiesto que el poder había cambiado de manos y que estaba definitivamente en las de los militares.



Los asesinatos alcanzaron su momento culminante con el estado de sitio impuesto por Arana cuando llegó a la presidencia en 1970. Arana fomentó la actividad económica que trajo como consecuencia un aumento de la agitación laboral que se agrupó en un movimiento de oposición más amplio. En 1973 hubo una cantidad de conflictos laborales sin precedentes, destacándose la huelga del magisterio que duró desde marzo a agosto; fue apoyada por manifestaciones estudiantiles y por la creciente población de los barrios marginales. También surgió, entonces un movimiento que favorecía la organización de los campesinos y trabajadores agrícolas.

Los años que siguieron al terremoto de 1976 estuvieron marcados por un número de acontecimientos significativos para el desarrollo de un movimiento de oposición. Luego de los intentos por formar un sindicato en la planta embotelladora de Coca-Cola en la ciudad de Guatemala, los trabajadores sufrieron despidos y el desalojo violento de la planta, que se había tomado, se formó, entonces, el Comité Nacional de Unidad Sindical (CNUS). A raíz de la continuación del conflicto hubo asesinatos de líderes sindicales y trabajadores lo que condujo, finalmente, a un exitoso boicot internacional de la Coca-Cola.

En noviembre de 1977 los mineros que protestaban por el cierre de una mina en Ixtahuacán, Huehuetenango, realizaron una marcha de 250 millas hasta la ciudad de Guatemala la que contó con un apoyo multitudinario a lo largo de todo el recorrido. Faltando poco para

llegar a la capital, se unieron a la marcha los trabajadores de la refinería de azúcar Pantaleón, en la costa sur y una gran muchedumbre saludó a los manifestantes en ciudad de Guatemala.

La marcha desde Ixtahuacán mostró la participación de indígenas en el movimiento popular. Otro paso significativo fue la formación del Comité de Unidad Campesina (CUC) el 1 de mayo de 1978. La influencia de la CUC se puso de manifiesto durante la huelga de los cortadores de caña de febrero de 1980, la cual fue apoyada por 17.000 personas entre trabajadores agrícolas y campesinos transhumantes de 70 plantaciones. El gobierno se vio obligado a decretar un aumento en el salario mínimo agrícola, que subió de 1.12 a 3.20 dólares por día. Esta huelga unió a trabajadores indígenas y ladinos, lo que significó un avance importante.

Las autoridades respondieron con una nueva ola de represión frente al crecimiento de este movimiento opositor de base tan amplia. El 8 de junio de 1977, Mario López Larrave, abogado del trabajo y fundador del CNUS, fue asesinado. Igual suerte corrió Mario Mujía, uno de los principales organizadores de la marcha de Ixtahuacán. La violencia era selectiva. De acuerdo con *Christian Science Monitor*, los principales objetivos incluían alcaldes, profesores, trabajadores de la salud y líderes de sindicatos y cooperativas; también, partidos políticos: a principios de 1979, Alberto Fuentes Mohr, líder del Partido Social Demócrata (PSD), y Manuel Colón Argueta, dirigente del FUR, Frente Unido de la Re-

volución, otro partido social demócrata, fueron asesinados; Fuentes fue muerto horas antes de que su partido fuera inscrito, y Colón cinco días después de inscribir al FUR. El 21 de junio de 1980, se secuestró a 27 dirigentes sindicales de alto nivel reunidos en Guatemala, quienes están actualmente desaparecidos, y, dos meses más tarde, 17 dirigentes sindicales más fueron secuestrados en un centro católico de retiro en Escuintla.

El asesinato de sacerdotes y catequistas condujo al cierre de la diócesis de El Quiché en agosto de 1980. Entre marzo y septiembre de ese año, 27 empleados y 50 estudiantes de la universidad nacional fueron muertos; también entre 1980 y 1981 se asesinó a 49 periodistas y 110 dirigentes sindicales fueron muertos en 1980. En enero de 1981 Amnistía Internacional expresó: "las personas que se oponen o se cree que mantienen una actividad contraria al gobierno, son sistemáticamente apresadas sin orden judicial, torturadas y asesinadas... Los cuerpos de las víctimas se encuentran amontonados en barrancos, abandonados en los caminos o enterrados en fosas comunes." Un médico forense de la capital afirmó que 2 de cada 3 cadáveres que él había examinado presentaban señales de tortura.

Dos sucesos en particular señalaron una virtual declaración de guerra de las autoridades en contra del movimiento popular. El 29 de mayo de 1978 se disparó en contra de una delegación de campesinos de Alta Verapaz la cual había sido invitada a reclamar ante el alcalde de la norteña ciudad de Panzós, porque los latifundistas ansiosos de explotar riqueza mineral se habían apropiado de sus tierras. Más de 100 campesinos resultaron muertos. El segundo suceso fue la masacre de la embajada española, del 31 de enero de 1980. Una delegación de campesinos indígenas del departamento del Quiché, que había venido a protestar ante el gobierno por las condiciones en su región, al no conseguir audiencia, luego de un mes de espera ocupó pacíficamente la embajada española. El gobierno, desoyendo los ruegos del personal de la embajada, ordenó a la policía tomar la representación diplomática por asalto. La policía, incapaz de desalojar a los ocupantes, prendió fuego al edificio, matando a 37 personas, incluyendo personal de la embajada y dos

ex-ministros guatemaltecos. El embajador español y un campesino guatemalteco sobrevivieron. El primero abandonó Guatemala bajo la protección de la embajada norteamericana. El campesino, quien quedó mal herido, fue secuestrado en el hospital y asesinado.

Esta serie de asesinatos consiguió unir a las organizaciones populares para protestar y defenderse. En 1979 se formó el Frente Democrático contra la Represión (FDCR), con representantes de más de 100 organizaciones, incluyendo sindicatos urbanos y rurales, grupos cristianos, estudiantes, pobladores de los barrios marginales, periodistas y profesionales. A muchos de sus miembros se les obligó partir al exilio, donde han permanecido activos atrayendo la atención internacional sobre los sucesos de Guatemala. La masacre de la embajada española produjo una ola de repudio y fue vista por muchas organizaciones como la confirmación de la imposibilidad de lograr un cambio por la vía pacífica. Por primera vez la federación sindical CNUS llamó al establecimiento de un gobierno popular y revolucionario. La masacre de la embajada española fue mencionada explícitamente en una declaración entregada por una reunión de grupos indígenas en Iximché el 14 de febrero de 1980. Esta declaración llamaba a la unidad entre indígenas y guatemaltecos ladinos contra el gobierno. Muchos grupos decidieron entonces unirse a organizaciones clandestinas y algunos de ellos formaron una nueva agrupación, el FP 31 (Frente Popular 31 de Enero) el cual se dedicó a acciones de hostigamiento y sabotaje. Otros grupos comenzaron a apoyar a los movimientos revolucionarios armados, con un notable aumento en la participación de comunidades indígenas. En 1980, el país atravesaba por un verdadero estado de guerra civil.

Las organizaciones guerrilleras habían ido creciendo y fortaleciéndose apesar de la represión, particularmente, entre la población rural indígena. En 1980 ya había cuatro grupos. El apoyo indígena a la actividad guerrillera se reflejó en el crecimiento del EGP (Ejército Guerrillero del Pueblo) y la ORPA (Organización del Pueblo en Armas). El EGP tenía su fuerte en las sierras del norte y la ORPA, en el centro y oeste del país; el FAR que había sufrido varias trans-

**Las organizaciones guerrilleras crecieron en medio de un verdadero estado de guerra civil. A pesar de la represión se fortalecieron, particularmente entre la población rural indígena.**

## **La política constitucional ha sufrido un descrédito permanente debido al predominio cada vez mayor de los militares y a la manipulación sucesiva de las elecciones a partir de 1954.**

formaciones desde su creación, tenía su base entre los trabajadores urbanos y también mantenía actividad en la costa sur y El Petén. El PGT se ubicó junto a los trabajadores organizados. En 1979 se inició un proceso de coordinación más estrecha que culminó en la formación de la Unión Revolucionaria de Guatemala (URNG) la cual comprende al EGP, la ORPA, el FAR y un sector del PGT.

### **El papel de Estados Unidos**

Estados Unidos siempre ha dominado la economía de Guatemala. Es la principal fuente de importaciones y el mercado más importante para sus productos de exportación. Es también la fuente principal de inversiones de capital en Guatemala, que en los últimos 20 años han provenido, en forma creciente, de los grupos económicos del "cinturón del sol" en el sur de Estados Unidos: Florida, Texas y California. Estos grupos se aprovecharon de las ventajosas oportunidades que ofreció a los inversionistas el mercado común centroamericano en 1966. Estos mismos grupos forman parte de la coalición conservadora que respalda al gobierno de Reagan.

La invasión de 1954 fue también uno de los primeros ejercicios de la nueva estrategia norteamericana en la región. El vicepresidente Nixon le calificó como una prueba de la nueva respuesta norteamericana frente a lo que él veía como subversión comunista. "Esta es la primera vez en la historia —dijo en 1955— en que un gobierno comunista ha sido reemplazado por otro libre. El mundo entero está a la expectativa por ver cuál de los dos lo hace mejor." Esta política ha sido desarrollada a lo largo de los años. Estados Unidos ha sido, en general, el proveedor más importante de equipo y adiestramiento para las fuerzas armadas guatemaltecas. En los años 60, en particular, Estados Unidos trató de desarrollar y probar en Guatemala una elaborada estrategia de contrainsurgencia, usando la experiencia de la guerra de Viet-Nam. La estrategia también incluía un intento de introducir una liberalización cuidadosamente controlada del sistema político a través de la constitución de 1965, de inspiración norteamericana, y un programa de

"acción cívica" para ponerlo en práctica junto con las campañas militares en las zonas rurales. Esto implicaba establecer "aldeas protegidas" y utilizar al ejército para el suministro de alimentos y promoción de la agricultura con el objeto de granjearse el favor de la población.

Semejante "liberación controlada" que impide toda posibilidad de distribución del poder existente, ha probado en repetidas ocasiones, ser inestable políticamente. La oligarquía guatemalteca ha suprimido siempre cualquier intento de participación popular en el gobierno y ha rechazado las reformas agrarias y económicas ampliamente reconocidas como imprescindibles para superar la crisis económica subyacente.

A pesar de las evidencias acumuladas respecto a las atrocidades cometidas contra la población indefensa, el gobierno de Reagan ha tratado de defender las gestiones de Ríos Montt y de Mejía Víctores, y ha buscado cómo evadir las restricciones del congreso norteamericano para los suministros de armas, clasificando los embarques como "comerciales" en vez de "militares."

### **Las iglesias**

La mayoría de la población guatemalteca es católica, pero la influencia de la Iglesia sobre el Estado se debilitó, seriamente durante el periodo de gobierno liberal en el siglo XIX. El gobierno confiscó tierras a la Iglesia, terminó con el monopolio eclesiástico de la educación y la beneficencia, e impuso restricciones a la entrada de religiosos extranjeros. Esta experiencia no sólo dejó a la iglesia debilitada materialmente, sino también en mala posición para intervenir, más adelante, en los asuntos nacionales.

La iglesia dispensó, inicialmente, buena acogida a las reformas de 1945 a 1954, pero el clero reaccionó duramente en contra de la pretendida influencia comunista y pronto comenzó a organizarse activamente en contra del gobierno. El arzobispo de la ciudad de Guatemala lanzó una "cruzada contra el comunismo" y el nuncio papal bendijo a las fuerzas de invasión de Castillo Armas por haber salvado a Guatemala.

En retribución a este apoyo, el nuevo régi-

men restituyó a la Iglesia una posición de influencia de la que no había gozado desde el siglo XIX y le concedió gran libertad especialmente para traer personal extranjero. Un número de sacerdotes, hermanos y monjas llegaron a Guatemala acudiendo al llamado del Papa Pío XII. El efecto que produjo en estos hombres y mujeres el experimentar las condiciones de vida de los pobres de Guatemala fue el de intensificar sus inquietudes sociales. En las zonas más pobres, el trabajo de la Iglesia se abocó a la formación de cooperativas y desarrollo comunitario y luego del Concilio Vaticano II (1962-1965) y de la conferencia de Medellín (1968), se ha preocupado de promover la justicia social y la dignidad humana. Este trabajo hizo que sectores de la Iglesia entraran en conflicto con aquellos regímenes que consideran cualquier forma de organización de los pobres como subversiva. La conciencia de la posición demedrada de la gran masa del pueblo guatemalteco se profundizó con ocasión del terremoto de 1976, especialmente luego de la pastoral de los obispos *Unidos en la esperanza*, la cual llamaba en un lenguaje más claro que nunca a la justicia social.

Esta preocupación social, sin embargo, no era compartida por todos los miembros de la Iglesia. Los obispos mantenían, en general, una actitud más bien cauta, y el cardenal Mario Casa-

riego y Acevedo, arzobispo de la ciudad de Guatemala desde 1964 hasta su muerte, en 1983, se opuso totalmente a que sacerdotes y religiosos se comprometieran en organizaciones comunitarias; varias veces solicitó, al gobierno, que restringiera las actividades de misioneros extranjeros. La oposición del cardenal y la cautela de los otros obispos, dejó un vacío que fue llenado por el clero comprometido y laicos. CONFREGUA, la Confederación de Religiosos de Guatemala, ha jugado un rol cada vez más activo en la protesta frente a las atrocidades cometidas por el gobierno y en la defensa de los oprimidos. En 1977, se formó el Comité Ecuménico para la Justicia y la Paz, para denunciar atropellos a los derechos humanos, el cual pasó a oponerse abiertamente al régimen luego de la masacre de Panzós. El número de sus miembros aumentó rápidamente, incluyendo a muchos sacerdotes y religiosas. Luego de que el clero se retirara de la diócesis de el Quiché, en 1980, se formó otro grupo eclesástico importante: la Iglesia Guatemalteca en Exilio.

Las comunidades cristianas que se han comprometido socialmente han sido el blanco de los ataques de sucesivos gobiernos. La Iglesia católica ha sido la más golpeada, debido particularmente a su influencia entre los pueblos indígenas. Se estima que en las últimas dos décadas, más de



10.000 catequistas han sido asesinados, se ha ametrallado conventos e interrumpido ceremonias religiosas. Dieciséis sacerdotes y religiosas han sido asesinados o han desaparecido desde 1976. La diócesis de el Quiché fue cerrada por dos años y medio a partir de 1980 como respuesta al asesinato de varios sacerdotes y a un atentado contra el obispo. Los obispos católicos han denunciado estos ataques como una persecución a la Iglesia y el Papa en un mensaje a los obispos guatemaltecos reunidos en Roma en noviembre de 1983 recordó a los catequistas, sacerdotes y trabajadores de la Iglesia que "en testimonio de su fe y de su servicio al pueblo de Guatemala, han pagado con su sangre y su libertad el alto precio de la violencia." El trabajo de la Iglesia está sumamente restringido todavía y aún se asesina a catequistas. Cualquier tipo de trabajo social es visto con hostilidad y desconfianza por los militares e incluso la palabra "catequista" es considerada subversiva y se le debe usar con discreción.

Las iglesias protestantes, en un proceso similar, han elevado el grado de su compromiso social, aunque menos numerosas han estado, también, menos involucradas en cuestiones sociales. Los protestantes socialmente comprometidos han sufrido en la misma medida que los católicos. Cuando el Papa Juan Pablo II visitó Guatemala en 1983, protestantes guatemaltecos le entregaron información relativa a la desaparición de 50 pastores, al asesinato de 35 y el encarcelamiento de otros 10 durante el año anterior.

En los últimos años ha habido en Guatemala un rápido crecimiento en el número de feligreses de sectas evangélicas fundamentalistas, muchas de ellas con base en Estados Unidos. Algunas fuentes estiman que el 20 por ciento de la población pertenece a estas sectas, las cuales han recibido un considerable apoyo financiero de parte de grupos conservadores en Estados Unidos. En estos últimos años se ha celebrado, por lo menos, una reunión entre los representantes de estas sectas, el gobierno guatemalteco y el gobierno de Reagan.

Tales conexiones aparecen implícitas en un informe para el gobierno norteamericano preparado por Nelson Rockefeller en 1969 sobre el catolicismo en América Latina, el cual califica de "subversivo" y hostil a los intereses de Estados Unidos.

## Perspectivas futuras

La situación de la población civil de Guatemala ha empeorado aún más últimamente. El precio de los alimentos básicos ha subido, en términos reales, al doble desde 1980 y el trabajo agrícola se interrumpe constantemente porque los hombres deben ir a hacer servicios en las patrullas de defensa civil el cual no es remunerado. Según algunos informes, esta situación conduce a penurias semejantes a las sufridas por el terremoto. Los trabajadores del área de la salud han informado de un significativo aumento en los niveles de desnutrición de la población rural.

El objetivo de los militares, a largo y mediano plazo, es consolidar su control a través del país. Se han establecido muchas bases militares en las zonas rurales y hay toda una red nacional de comisarios militares e informantes. Aunque los informes sobre masacres perpetradas no son tan comunes ahora, esto no significa que ellas no ocurran. El terror y la represión sobre la población se evidencian en las frecuentes "desapariciones" y asesinatos. Esta violencia apunta a impedir, primero, el desarrollo de cualquier organización de oposición no armada al gobierno y, segundo, un rebrote del apoyo al movimiento guerrillero cuya infraestructura básica, según informes, permanece intacta.

La primera fase del plan de contrainsurgencia de los militares, la "pacificación," ha creado un gran número de refugiados internos o desplazados. Algunos cálculos estiman alrededor de 500.000 a un millón de personas, en una población total de poco más de 7 millones. Una gran cantidad de personas se encuentra ahora en "aldeas modelo" o en campos de refugiados luego de haber huido de sus aldeas ante el terror militar, de haberse escondido, a veces por meses, en las montañas antes de entregarse al ejército. Otro trágico resultado de la campaña del ejército es el elevadísimo número de viudas y niños quienes han perdido a uno o a ambos padres. Recientemente, el Grupo Parlamentario Británico de Derechos Humanos acusó a los militares guatemaltecos de "estar creando una nación de viudas y huérfanos." La situación de los refugiados que huyeron a México y se instalaron cerca de la frontera se ha puesto más difícil en los últimos meses ya que muchos de ellos han sido ubicados lejos de la frontera con Guatemala.

La reubicación de la población dentro de Guatemala y el establecimiento de "aldeas modelo" concuerda con la segunda y tercera fase de la estrategia de contrainsurgencia de los militares. El desarrollo de esta estrategia unido al aumento de las patrullas de "defensa civil" está permitiendo al ejército avanzar en la militarización de todo el país. El efecto que esto ha tenido en los grupos guerrilleros ha sido el de debilitar su contacto con la población; algunos observadores dentro de Guatemala concuerdan en que la guerrilla sufrió un serio retroceso durante el período de Ríos Montt. Sin embargo, los enfrentamientos armados continúan y hay indicios de que el movimiento guerrillero sigue siendo una amenaza para el ejército. La estrategia militar no se limita sólo al control de la población sino que intenta imponer una nueva ideología que justifique el rol del ejército en el manejo del país.

El ejército guatemalteco, en estos momentos, está dedicado a limpiar su empañada imagen internacional y el gobierno de Reagan presiona insistentemente para que esto ocurra, porque el ejército necesita de la ayuda internacional, en particular de Estados Unidos, para poder desarrollar su estrategia y de la inversión extranjera para levantar una economía tan débil como la guatemalteca. Además, aunque algunos armamentos son fabricados en el país, el ejército aún depende en gran medida de fuentes externas en lo que se refiere a asistencia militar.

Es contra este telón de fondo que se deben analizar las elecciones de una asamblea constituyente de julio de 1984 (las cuales arrojan una mayoría de centro-derecha) y las elecciones presidenciales previstas para 1985. Las elecciones de 1984 fueron relativamente limpias y se espera que otro tanto ocurra con el proceso electoral para elegir presidente.

Hay indicios que permiten afirmar que se elegirá a un presidente civil, lo cual no significa la entrega del poder por parte de los militares. Ha habido claras advertencias a la asamblea constituyente en el sentido de no cuestionar el monopolio militar del poder. Ninguno de los partidos políticos actuales ha mencionado la necesidad de reformas económicas o de una reforma agraria. Tampoco hay ninguna sugerencia de su parte para que se juzgue a los responsables de las numerosas violaciones a los derechos humanos. Si bien es cierto que hay algunas diferencias entre los militares, éstas no son sino de carácter táctico; no hay desacuerdo sobre la necesidad de continuar la estrategia de contrainsurgencia que precisa del control militar y ésta tampoco ha sido cuestionada por los partidos políticos.

Lo más probable es que haya muy poco espacio para maniobras políticas en el período que antecede a las elecciones presidenciales. Sin embargo, es posible que haya un resurgimiento gradual y limitado de las organizaciones populares de masas, pero se teme que si el movimiento logra cierto desarrollo, se convierta en el blanco de una despiadada represión una vez terminado el proceso electoral. Las guerrillas no son una fuerza exhausta, pero es muy improbable que tomen la iniciativa en un futuro inmediato.

Lo cierto es que el ejército no muestra el menor signo de querer ceder ni la más mínima cuota del monopolio del poder y el costo de esto en recursos malgastados, en devastación material y en vidas humanas no ha sido jamás motivo de preocupación para los actuales gobernantes del país por la que la agonía del pueblo guatemalteco se prolongará.

Enero de 1985.